

bre 10 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por los Señores Goldsmhids y Gavica, contra el cobro que les hace la Tesorería del Ayuntamiento de Mazatlan, por el impuesto municipal denominado derecho de piso.

FEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que habiendo examinado las pruebas rendidas por la parte de los Señores Goldsmhids y Gavica, en el juicio de amparo que han promovido contra la Tesorería Municipal de esta ciudad que les exige el pago del derecho de piso de mar, por efectos introducidos como de tránsito, encuentra: que en su concepto, los Señores interesados han probado bastante que los tercios de azúcar y barriles de aguardiente sobre que versa la cuestión, han venido á este puerto guiados como de tránsito; y que por consiguiente, no deben causar por ello el derecho que se les exige, conforme á las disposiciones de la ley general de 1º de Mayo de 1868.

Por lo expuesto, el fiscal concluye su pedimento que tenia suspendido, hasta examinar las pruebas, suplicando al Juzgado se sirva declarar: que la Justicia de la Unión ampara y protege á los Señores Goldsmhids y Gavica, contra el cobro indebido que les hace la Tesorería Municipal, por los efectos de tránsito que introdujeron. Mazatlan, Setiembre 17 de 1873.—*L. Gaona*.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mazatlan, Setiembre 21 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por los

Señores Goldsmhids y Gavica de este comercio, contra las providencias de la Tesorería Municipal, que les exige por medio de la facultad económico-coactiva, el pago del derecho de piso de mar, por los efectos que bajo su consignación han estado en este puerto, cuya disposición según los quejosos, viola la garantía que les otorga el artículo 16 de la Constitución general de la República, por que se les hace el cobro de un impuesto que no se ha decretado por autoridad competente, fundando su queja en las fracciones 1ª y 3ª del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869. Visto el informe de la autoridad ejecutora, en el que asegura que el cobro que hace á los Señores Goldsmhids y Gavica, no es por mercancías que hayan tocado de simple tránsito, sino por efectos que fueron consignados á esta plaza y consumidos en ella. Que los municipios del Estado están facultados por la Constitución del mismo, para decretar los arbitrios que sean necesarios para cubrir sus gastos, y que en virtud de esa facultad, cobra á los mencionados Señores, la cantidad de quinientos diez y seis pesos cincuenta y dos centavos, que han causado los efectos que les han sido consignados; que el expresado cobro no es contrario á la Constitución ni á la ley de 1º de Mayo de 1868, por que no se hace en virtud de lo dispuesto en el artículo 5º de las ordenanzas municipales, cuyo artículo fué modificado, suprimiendo en él la palabra "tránsito," para que no estuviera en oposición con la ley antes citada, sino por el consumo de las relacionadas mercancías, las que si hubieran pasado de tránsito, no se habría vendido una parte como lo aseguran los quejosos, sino que hubieran caminado íntegras con sus documentos, hasta su final destino; y por último: que la ley de 1º de Mayo de 1868, se refiere al comercio de Estado á Estado, y no al de municipio á municipio, para cuyo arreglo no está facultado el Congreso de la Unión, perteneciendo exclusivamente esta facultad al Gobierno del Estado, por cuyas

razones cree que no procede el recurso de amparo que se ha promovido.

Visto el pedimento fiscal; las pruebas rendidas por los Señores Goldsmhids y Gavica, y todo lo demas que de autos consta y ver convino.

Considerando: que segun la fraccion 30 del artículo 72 de la Constitucion federal de la República, está en las atribuciones del Congreso de la Union, dictar las leyes que sean necesarias para hacer efectivas las facultades que la misma concede.

Que una de estas, la contenida en la fraccion 9ª del espresado artículo, lo autoriza para impedir por medio de bases generales, que en el comercio de Estado á Estado, se establezcan restricciones honerosas.

Que en virtud de las facultades espresadas, ha podido legalmente espedir el decreto de 1º de Mayo de 1868, que previene: que los estados no puedan cobrar derechos por el simpel tránsito de mercancías, cuyas disposiciones se han dictado sin duda para mantener las buenas relaciones que deben existir en los Estados de la Confederacion, y para fomentar el desarrollo del importante ramo del comercio, quitando todas las trabas que pudieran oponerse.

Que cuando las mercancías caminan con documentos que traen escala, no se entiende que llegan á su final destino, sino hasta que tocan al último punto de este, pudiendo los dueños ó consignatarios vender en el tránsito ó en cualquiera punto de la escala, parte de las mercancías, siempre que paguen los derechos que causen, y presenten los documentos que cubre la carga á la oficina correspondiente, para que se hagan las respectivas anotaciones, sin que por esto queden obligados á pagar derechos por los efectos que no se han vendido, pudiendo continuar éstos como de tránsito hasta su final destino.

Que los Señores Goldsmhids y Gavica, han demostrado con copias certificadas de la Tesorería general del Estado, que los derechos que les exige la Tesorería Municipal,

son por efectos que han llegado á esta plaza de tránsito, juntamente con otros que aquí se han consumido, y cuyos derechos por los últimos, estan dispuestos á satisfacer á los fondos municipales.

Que cualquiera que sea la denominacion que se dé al impuesto que se cobra á los quejosos, por la parte de los efectos que tocó de tránsito á ese puerto, es contrario á las espresada ley de 1º de Mayo de 1868, sin que pueda decirse que esta disposicion ataque á la Soberania de los Estados, por que estos tienen las facultades que por la Constitucion no se han concedido á los funcionarios de la federacion, artículo 117 de la Constitucion; y como una de las que espresamente se han concedido al Congreso de la Union, es la de impedir que se impongan restricciones honerosas al comercio de los Estados, es evidente que al hacer uso de esta facultad, no se invade la soberania de estos, ni mucho menos las de los municipios, por que en el presente caso no se trata del comercio de municipio á municipio de un mismo Estado, sino de efectos que pasan de un Estado á otro distinto.

Que aunque es cierto que los ayuntamientos de Sinaloa estan facultados por la Constitucion del Estado, para decretar los arbitrios que sean necesarios para cubrir los gastos del municipio, tambien lo es que su facultad esta limitada y no puede estenderse á mas de lo que podria el Estado, y por consiguiente, no tiene facultad de decretar impuesto en contravencion á las leyes generales, supuesto que el mismo Estado no puede hacerlo.

Por último: que el cobro que el C. Tesorero Municipal hace á los Señores Goldsmhids y Gavica, por veinte tercios de azúcar y 62 barriles de aguardiente, que han probado que tocaron á este puerto tan solo de tránsito, es contrario á las disposiciones legales antes citadas, y con su ejecucion, se violan las garantías que otorga la Constitucion en sus artículos 16 y 27.

Por tales consideraciones, y con funda-

mento de los artículos 101 y 102 de la repetida Constitucion federal, y de conformidad con la opinion de C. Asesor, debia de fallar y fallo con las proposiciones siguientes; primera: la Justicia de la Union ampara y protege á los Señores Goldsmhids y Gavica, contra el cobro que el C. Tesorero municipal les hace por medio de la facultad económico-coactiva, y bajo el nombre de derechos municipales, por 20 tercios de azúcar y 62 barriles de aguardiente, que de tránsito para otros Estados tocaron á éste puerto, por violarse con este acto, las garantías consignadas en los artículos 16 y 21 de la Constitucion general de la República. Segunda: notifíquese y sacándose; dos copias de ésta sentencia, remítase una al Semanario Judicial, y la otra á uno de los periódicos de esta Ciudad para su publicacion, mandándose los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Lo proveyó y firmó el C. Maximo Barragan, primer suplente del Juzgado de Distrito del Estado, en ejercicio. Doy fé. *Maximino Barragan*.—*Francisco Medina*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 19 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por los Señores Goldsmhids y Gavica, contra el cobro que con empleo de la facultad económico-coactiva les hace la Tesorería del ayuntamiento de Mazatlan, de la cantidad de docientos cuarenta pesos diez centavos, como importe del impuesto municipal denominado derecho de piso, que considera haber causado la introduccion de veinte tercios de azúcar y sesenta y dos barriles de aguardiente, en razon de haber llegado á ese puerto como á su final destino, para ser consumidos ahí á consignacion de los promoventes, los cuales por su parte manifiestan que el cobro de ese impuesto en su caso, esta prohibido por la ley

de 2 de Mayo de 1868 expedida por el congreso general, para ser efectivo lo dispuesto en la fraccion 9ª del artículo 72 de la Constitucion de la República, violándose tambien el artículo 16 de la misma, al exijírseles dicho impuesto sin causa alguna legal, y considerando: que está plenamente justificado, que las mercancías en cuestion tocaron en Mazatlan simplemente de tránsito para otros Estados, y que la ley de 2 de Mayo de 1868, decretada por el Congreso de la Union en uso de las facultades que le concede la Constitucion, para impedir por medio de bases generales, que en el comercio de Estado á Estado se establezcan restricciones honorosas, prohíbe á los Estados cobrar derechos por el simple tránsito de mercancías.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito en 21 de Setiembre del presente año, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á los Señores Goldsmhids y Gavica, contra el cobro que el C. Tesorero Municipal les hace por medio de la facultad económico-coactiva y bajo el nombre de derechos municipales, por veinte tercios de azúcar y sesenta y dos barriles de aguardiente, que de tránsito para otros Estados tocaron en el puerto de Mazatlan.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Asi por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José Maria Iglesias*.—*Juan J. de la Garza*.—*José Maria Lozano*.—*José Arteaga*.—*Ignacio Ramirez*.—*M. de Castañeda y Nájera*.—*J. M. del Castillo Velasco*.—*M. Auza*.—*Simon Guzman*.—*Luis Velasquez*.—*José Garcia Ramirez*.—*M. Zavala*.—*Ignacio M. Altamirano*.

rano.—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, 7 de Febrero de 1874.—*Lic. Emilio Ordáz*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango por el C. Rafael Barrera, contra los procedimientos del Ayuntamiento de esa ciudad, en virtud de los que privó al solicitante del uso del agua que le habia concedido, é impuso nuevas condiciones al contrato de arrendamiento que habia celebrado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El C. Gefe de Hacienda encargado de llevar la voz fiscal, dice: que el quejoso funda su pedimento de amparo en la violacion de garantías individuales, y en concepto del que habla, lo principal de que se trata en este juicio es la violacion de un contrato, por cuya razon cree que en lo principal, debe el quejoso hacer valer sus derechos ante las Tribunales ordinarios del Estado, y concluye pidiendo al Juzgado que su fallo sea en ese sentido. Durango, Junio 21 de 1873.—*Juan Nájera*.—Una rúbrica.

Otro pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

El C. Gefe de Hacienda encargado de llevar la voz fiscal, dice: que no encontrando motivos para cambiar de opinion con respecto á lo que se expuso en su pedimento de fojas 23, reproduce ese mismo pedimento en calidad de alegato. Durango, Julio 17 de 1873.—*Juan Nájera*.—Una rúbrica.

Son copias que certifico. Durango. Julio 24 de 1873.—*Juan Nájera*.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Durango, Julio 24 de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Rafael Barrera, contra las providencias del Ayuntamiento de esta ciudad, por las que le mandó privar del uso del agua que se le habia concedido en virtud de un contrato, é imponiendo ademas nuevas condiciones que afectan la subsistencia del mismo contrato. Visto el artículo sobre suspension del acto reclamado; sus trámites y resolución en favor de la suspension, en virtud de la urgencia notoria. Examinadas las constancias presentadas por el quejoso; el informe de la autoridad contra quien se quejó; atendido el pedimento fiscal, y cuanto mas ver convino.

Considerando: que de las referidas constancias, aparecen plenamente justificados los siguientes hechos. Primero: Don Rafael Barrera se presentó al Ayuntamiento de esta ciudad, solicitando una merced de agua para abrir un establecimiento de baños públicos, con tres pilas y una atargea para lavaderos (Documento de fojas 22 remitido por el mismo Ayuntamiento). Segundo: á esa solicitud recayó un acuerdo de esa corporacion, cuyo tenor aparece á las fojas 1ª de estos autos, con el aditamento que se vé á las fojas 3ª. Tercero: posteriormente el C. Barrera puso una comunicacion, manifestando: que se resolvía á construir en su establecimiento de baños otras cuatro pilas mas, sin que esta mejora importara el uso de mas cantidad de agua de la que se le tenia concedida (documento de fojas 4). Cuarto: el Ayuntamiento contestó á este aviso, dando un acuerdo en que mandó tapar el forámen por donde se conducía el agua al establecimiento de Barrera, y prescribiendo á este nuevas condiciones, sin